Dos acciones tomadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas en las últimas dos semanas ilustran de manera dramática la aportación que el sindicalismo está haciendo al enfrentamiento de la crisis. Una táctica de presión durante la negociación laboral: la negativa a cobrar impuestos, que ha sido siempre parte de su tarea, debió ser reconsiderada, frente al riesgo de rescisiones de contrato. Luego, en la víspera de que estallara la huelga anunciada para el miércoles 16 de marzo, el SME aceptó un incremento salarial de 27 por ciento. La tasa es dos puntos más alta que la prevalente, pero es cuatro veces más baja que la pretendida por el propio sindicato, que demandó 115.4 por ciento.

Está pendiente todavía, y el tema se discutirá en la semana que se inicia, la suerte de más de tres mil trabajadores, empleados por obra determinada. La empresa se propone despedirlos, y técnicamente está en posibilidad de hacerlo, pues su vinculación jurídica con ellos se agota, como el nombre de la relación laboral lo indica, cuando se concluye el trabajo respectivo. Procede correctamente el sindicato, sin embargo, al procurar impedir el cese masivo, no sólo porque ello lesiona a miembros de la agrupación, sino porque otras obras de indispensable realización pueden ser emprendidas por los obreros a quienes quiere despedirse.

En semejante acción defensora del empleo, los trabajadores de Dina alcanzaron menor eficacia. Después de decretada la inexistencia del movimiento, cuyo laudo fue suspendido por el Poder Judicial Federal, en la madrugada del 10 de marzo el sindicato aceptó un aumento directo de 20 por ciento, más 2,700 pesos al mes para despensa y 12.5 por ciento más a partir de julio próximo. Para ello, debió admitir la posición de la empresa, que se concretará en el despido de 2,552 trabajadores. Bien es verdad que ese reajuste dejó

El cántaro de la prudencia obrera

Miguel Angel Granados Chapa

de ser condición para revisar el contrato colectivo, como lo quiso la parte patronal. Pero las modalidades convenidas no quitan gravedad al hecho. Mediante el cumplimiento de las estipulaciones legales y las del contrato, se convino en que serán despedidos los trabajadores excedentes. La empresa ha sostenido, y está en capacidad de probarlo, por la sola baja de la producción, que sobra el número anotado de obreros. De suerte que aunque los dirigentes sindicales proclamen con estridencia que "han combatido la política de austeridad", lo cierto es que optaron por plegarse a esa opción ofrecida por la empresa, que también había considerado posible no despedir a nadie (aunque el personal que de todas maneras juzga excedente se le relevaría de tareas en la línea de producción) a cambio de que no hubiera un solo centavo de incremento salarial.

Respecto de los salarios, pues, estos dos grandes sindicatos se han avenido a lo que se les ofrece de antemano, aunque pujan por elevar las propuestas. Como ellos, otras agrupaciones de trabajadores, señaladamente los universitarios, admitieron aumentos muy por debajo de sus propias peticiones y de sus necesidades. La mayor parte de estos agrupamientos laborales ejercen la democracia interna y son me-

nores en ellos, por lo tanto, los riesgos de manipulación y control vertical. A pesar de que el secretario del Trabajo sea conocido por la rudeza de sus actitudes políticas, no se sabe que presiones violentas o intimidatorias hayan conducido a los sindicatos de que hablamos a ajustarse a lo que se les propone.

Es válido, por consiguiente, considerar que es la prudencia de los trabajadores, su clara percepción de las dimensiones de la crisis, lo que los ha llevado a constreñir de este modo sus demandas y, al hacerlo, a mantener bajo contención sus posibilidades de exigencia y movilización políticas. El Congreso del Trabajo por su parte, ha llevado las cosas al extremo. Su dependencia respecto de las directrices estatales, que sectores dentro de él pretendieron en vano reducir, va por el contrario en ascenso, al punto de sujetar sus propias demandas a lo que le diga el gobierno.

Ahora bien, no hay que llevar tanto el cántaro de la prudencia obrera al agua de la austeridad, que se rompa. La cordura y el buen sentido, y hasta la sumisión tienen límites. No parece que la inflación ceda al influjo de las medidas contraccionistas dictadas por el gobierno. Por consecuencia, el empobrecimiento de los trabajadores sensatos que han resuelto hincarse al ver la procesión, se agravará, haciendo cada vez menos fácil la sindéresis.

A falta de respuestas económicas en el corto plazo, el Estado debiera ofrecer las políticas, buscando en verdad fortalecer sus lazos con los trabajadores, los independientes, los del Congreso del Trabajo, los democráticos. Ellos han cubierto su cuota en la crisis de diversas maneras. Probaron ya entonces, que son los aliados inequívocos y no veleidosos del proyecto estatal expreso en la Constitución, aun la reformada por De la Madrid.